

Medellín, 9 de octubre de 2024.

CO02VJ0163 – 2024_653675

Señores

Juzgado 2 Civil del Circuito de Cali

Email: j02cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

CALI

Referencia: Respuesta Acción de Tutela promovida por la señora MARIA TERESA RIVERA DE CORREA en contra de Protección S.A.

Radicado: 2024-00198

Solicitud especial: Se solicita al juzgado remitir copia íntegra de la decisión judicial que se profiera en el presente asunto. En caso de ser posible puede ser enviada al correo electrónico institucional: accioneslegales@proteccion.com.co, lo anterior para poder ejercer un correcto control de legalidad sobre las providencias que remiten los juzgados a Protección S.A.

Solicitud de vinculación: Se solicita respetuosamente vincular a la COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. en calidad de aseguradora en la Renta Vitalicia contratada en su momento para el señor **Javier Correa Ospina**.

En mi calidad de representante legal judicial de la **Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A.**, tal como consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia que se anexa, dentro de la oportunidad legal establecida para el efecto, me permito suministrar la información solicitada en relación con los hechos que originaron la presente acción de tutela, en los siguientes términos:

ANTECEDENTES

Sea lo primero indicar que **el señor Javier Correa Ospina** quien se identificó en vida con Cédula de Ciudadanía No. 14957833 presentó afiliación al fondo de Pensiones Obligatorias Administrado por Protección S.A. desde 20 de marzo de 1996 y con Fecha de Efectividad de la afiliación del 1 de mayo de 1996.

Con definición del 17 de octubre del 2003 se reconoció la pensión de vejez al señor **Javier Correa Ospina otorgada** con la contratación de renta vitalicia a la aseguradora **Suramericana** a quien se le transfirió la totalidad de la Cuenta de Ahorro Individual, siendo esta quien pagaría las mesadas pensionales hasta la fecha de su muerte y en caso de ser procedente, a sus beneficiarios de ley.

Ahora bien, el señor **Javier Correa Ospina** adelantó un proceso ordinario laboral en el que solicitó la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen efectuado desde el RPM hacía el RAIS, el resultado de este proceso fue favorable para el accionante pues en sentencia de primera instancia se resolvió:

SENTENCIA No. 304

En mérito de lo expuesto, el **Juez Séptimo Laboral del Circuito de Cali**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones propuestas por las demandadas.

SEGUNDO: DECLARAR la **INEFICACIA** de la afiliación efectuada por el señor **JAVIER CORREA OSPINA** identificado con la CC. No. 14.957.833 al fondo **PROTECCION S.A.**, en consecuencia **DECLARAR** que para todos los efectos legales que el actor nunca se trasladó al **RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD** y por lo mismo siempre permaneció en el **RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA**.

TERCERO: DECLARAR la **INEFICACIA** del contrato de **RENTA VITALICIA** suscrito entre el actor **JAVIER CORREA OSPINA** y la **LITISCONSORTE NECESARIA SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.**, dejándolo sin efecto jurídico alguno y retornando todos sus efectos al estado anterior en que se encontraban los actos previo la suscripción del mismo.

CUARTO: Como secuela obligada de la anterior determinación, el demandante deberá ser admitido nuevamente en el régimen de prima media con prestación definida administrado por la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES**, conservando todos los beneficios que pudiera llegar a tener si no hubiera realizado el mencionado traslado, dejando sin efecto jurídico alguno el mismo, tal y como fue manifestado en la parte considerativa.

QUINTO: ORDENAR a **PROTECCION S.A.**, a devolver, todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del actor, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como lo dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con los rendimientos que se hubieren causado, junto con el porcentaje de gastos de administración en que se hubiere incurrido, previstos en el art. 13 literal q) y el artículo 20 de la Ley 100 de 1993.

SEXTO: ORDENAR a la demandada **PROTECCION S.A.**, a que reintegre a la **NACION-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO- OBP- OFICINA DE BONOS PENSIONALES**, los valores reconocidos por concepto del Bono Pensional Tipo A, emitido y pagado a favor del actor, reintegro que deberá efectuarse debidamente actualizado (IPC) desde la fecha en que fue pagado el mismo hasta la fecha de reintegro efectivo.

SEPTIMO: CONDENAR a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, a reconocer y pagar al señor **JAVIER CORREA OSPINA** la pensión de vejez, conforme a lo dispuesto en el Art. 38 de la Ley 100 de 1993 por ser beneficiario del régimen de transición, y bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, desde el día siguiente en que se haya efectuado efectivamente el traslado a dicha entidad de todos los valores por cotizaciones y demás emolumentos que se están ordenando retornar en el presente fallo; con 14 mesadas al año, conforme con los lineamientos y pautas expuestas en la parte motiva de esta providencia, sin que en ningún caso la mesada pensional a reconocer sea inferior para el año 2019 a **\$1.695.470,11**. La demandada se grava con el pago de la correspondiente Indexación desde la fecha de obligatoriedad, es decir, una vez se haya realizado efectivamente el traslado de los dineros aquí ordenados y hasta la fecha en que sea efectivamente reconocido el derecho pensional por parte de dicha entidad.

OCTAVO: En virtud de la demanda de reconversión presentada por **PROTECCIÓN SA**, **ORDENAR** al señor **JAVIER CORREA OSPINA** identificado con la CC. No. 14.957.833, a que una vez se haya efectuado el traslado de sus cotizaciones al RPM, reintegre o pague a **PROTECCIÓN S.A.**, los valores correspondientes por concepto de mesadas pensionales anticipadas pagadas al actor del 19 de septiembre de 2003 al 28 de junio de 2009, los cuales deberán ser cancelados debidamente indexados.

NOVENO: NEGAR las demás pretensiones propuestas por **PROTECCION S.A.**, en la demanda de reconversión, de conformidad y por las razones expuestas.

DECIMO: COSTAS a cargo de **PROTECCION S.A.**, se fijan como agencias en derecho la suma de **2 SMLMV**. Liquidense por Secretaría.

UNDÉCIMO: Sin costas a cargo de **COLPENSIONES** y de **SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.**.

DUODÉCIMO: CONSULTESE con el Superior la presente decisión en el evento de no ser apelada.

La sentencia de segunda instancia resolvió:

PRIMERO: MODIFICAR el numeral Primero de la Sentencia Consultada y Apelada N° 304 del 05 de agosto del 2019, proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cali y **DECLARAR** probada parcialmente la excepción de prescripción propuesta por la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, respecto de las mesadas y diferencias pensionales a favor del señor **JAVIER CORREA OSPINA** causadas con anterioridad al 18 de septiembre del 2015, por las razones expuestas en la considerativa de la sentencia.

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral Quinto de la Sentencia Consultada y Apelada N° 304 del 05 de agosto del 2019, proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cali, y **ORDENAR** que la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍA PROTECCIÓN S.A.** deberá devolver los gastos de administración que haya cobrado durante el tiempo en que estuvo afiliado el demandante, junto con las primas pagadas por los seguros previsionales de cualquier índole, el porcentaje cobrado por concepto de garantía de pensión mínima. Todos estos valores deben ser devueltos junto con los rendimientos que hayan producido.

CIA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S.A. deberá devolver a **COLPENSIONES** el capital restante que tenga para financiar la pensión del demandante.

TERCERO: ADICIONAR el numeral Sexto de la Sentencia Consultada y Apelada N° 304 del 05 de agosto del 2019, proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cali, en el sentido de, **ORDENAR** a la **CIA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S.A.**, a reintegrar a la **NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO – OFICINA DE BONOS PENSIONALES**, los valores reconocidos por concepto del Bono Pensional Tipo A, emitido y pagado a favor del actor, reintegro que deberá efectuarse debidamente actualizado (IPC) desde la fecha en que fue pagado el mismo hasta la fecha de reintegro efectivo.

CUARTO: MODIFICAR el numeral Séptimo de la Sentencia Consultada y Apelada N° 304 del 05 de agosto del 2019, proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cali, respecto al reconocimiento y pago de la pensión de vejez por parte de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** al señor **JAVIER CORREA OSPINA**, causada el 28 de junio del 2009, en monto de \$1.471.093,55 para dicha calenda con los correspondientes incrementos anuales conforme al IPC; la mesada para el año 2021 asciende a la suma de \$2.223.267,05; **COLPENSIONES** solo pagará la diferencia de lo que se ha cancelado por mesada pensional por la aseguradora, desde el 18 de septiembre del 2015 hasta la ejecutoria de esta providencia. Al 31 de diciembre del 2020, las diferencias pensionales adeudada menos lo pagado por mesadas

entre 1/10/2003 y 27/06/2009 (\$36.856.839,12), asciende a \$55.399.083,68, suma por la que se eleva condena. Se seguirán causando las diferencias hasta la ejecutoria de esta providencia, a partir de la cual **COLPENSIONES** pagará en forma completa la pensión de vejez. Del retroactivo se ordena descontar los aportes a salud.

QUINTO: REVOCAR el numeral Octavo la Sentencia Consultada y Apelada N° 304 del 05 de agosto del 2019, proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cali, y en su lugar, estarse a lo dispuesto en el numeral cuarto de esta providencia

SEXTO: CONFIRMAR en todo lo demás sustancial, la Sentencia Consultada y Apelada N° 304 del 05 de agosto del 2019, proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cali.

SÉPTIMO: La **CIA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S.A.** dejará de pagar la pensión de vejez que le viene reconociendo al demandante a partir de la ejecutoria de esta providencia, de acuerdo con lo indicado en la parte motiva.

OCTAVO: COSTAS en esta instancia a cargo de la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍA PROTECCIÓN S.A.**, la **NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO – OFICINA DE BONOS PENSIONALES** y la **CIA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S.A.**, apelantes infructuosos por la suma de \$900.000 cada una.

Medellín: Cll. 49 No. 63 - 100 Medellín Torre Protección. Tel: (604) 230 7500 * Bogotá: Transv. 23 N. 97 - 73 piso 5 Edificio City Business. Tel: (601) 601 2525 - 601 3535 * Cali: Cll. 64 Norte No. 5B - 146 Centro Empresarial Local 47. Tel: (602) 608 0086 * Barranquilla: Cra. 52 No. 76 - 167 C.C. Atlantic Center Oficina 504 Locales 113 y 114. Tel: (605) 360 8929

www.proteccion.com * Línea de servicio Nacional 01 8000 52 8000 * NIT. 800.138.188-1

La Compañía de seguros Suramericana interpuso recurso extraordinario de casación pero este fue declarado desierto por lo que la sentencia de segunda instancia quedó en firme y debidamente ejecutoriada, así las cosas, las ordenes a cargo de las demandadas fueron claras con respecto a cada una de las demandadas:

Entidad	Obligaciones según la sentencia
Colpensiones	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reconocer y pagar la pensión de vejez a Javier Correa Ospina desde el 28 de junio de 2009, ajustada según el IPC. 2. Pagar la diferencia de lo que se ha cancelado por mesada pensional desde el 18 de septiembre de 2015 hasta la ejecutoria de la providencia. 3. La mesada para el año 2021 se establece en \$2.223.267,05. 4. Descontar los aportes a salud del retroactivo a pagar. 5. No pagar mesadas o diferencias pensionales causadas antes del 18 de septiembre de 2015.
Protección S.A.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Devolver los gastos de administración cobrados durante la afiliación de Javier Correa Ospina, así como las primas pagadas por seguros previsionales y el porcentaje cobrado por garantía de pensión mínima, junto con los rendimientos generados. 2. Asumir las costas del proceso, fijadas en \$900.000.
Suramericana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Devolver a Colpensiones el capital restante que tiene para financiar la pensión de Javier Correa Ospina. 2. Reintegrar al Ministerio de Hacienda los valores del Bono Pensional Tipo A, actualizados según el IPC. 3. Dejar de pagar la pensión de vejez a Javier Correa Ospina a partir de la ejecutoria de la providencia. 4. Asumir las costas del proceso, fijadas en \$900.000.

Así las cosas, se informa que las ordenes impuestas a esta Administradora fueron cumplidas pues se efectuó el pago de las costas con la constitución del título de deposito judicial, los gastos de administración fueron pagados a Colpensiones y las primas de seguros previsionales fueron pagados a la aseguradora.

Nótese que ninguna de las ordenes fueron supeditadas entre sí, por lo que es claro que, desde el momento en el que quedó en firme la sentencia, el señor Javier Correa Ospina se consideró como pensionado en Colpensiones, esto de conformidad con la sentencia en el ordinario que declaró que el demandante NUNCA estuvo afiliado al RAIS y por ende, a esta Administradora, adicionalmente, la sentencia de segunda instancia ordenó de forma expresa que desde el momento de la ejecutoria, Colpensiones debía pagar de forma completa la pensión de vejez.

Lo anterior sin perjuicio del trámite administrativo que se deben adelantar entre Protección como AFP, Suramericana como aseguradora en la renta vitalicia y Colpensiones como entidad que debía pagar la pensión de vejez al señor Javier Correa Ospina.

Por lo anterior, se debe reiterar que desde el momento de la ejecutoria, Colpensiones debía pagar al señor Javier Correa Ospina la pensión de vejez y en consecuencia, considerarlo como su afiliado pensionado, por lo tanto, la solicitud pensional que está elevando la señora MARIA TERESA RIVERA DE CORREA como supuesta cónyuge del señor Javier Correa Ospina la debe dirigir ante Colpensiones para efectos de que resuelva si tiene derecho o no a la sustitución pensional de la prestación económica que devengaba el señor Javier Correa Ospina y que le fue ordenada a pagar a Colpensiones desde antes de su fallecimiento, esto considerando que se consideró como ejecutoriada la sentencia en el mes de febrero del 2024 cuando se declaró desierto el recurso de casación y el señor Javier Correa Ospina murió en el mes de marzo del 2024.

DERECHO DE PETICIÓN

En lo que respecta a los hechos narrados en el escrito de tutela, fue posible establecer que, a nombre de la parte hoy **accionante**, efectivamente se presentó derecho de petición ante esta AFP en los términos señalados en acción legal. Por tanto, en este acápite traemos a colación el trámite impartido por Protección S.A. al respecto.

Derecho de petición con respuesta clara, precisa y de fondo.

Con el fin de atender la consulta elevada, el día **8 de agosto del 2024** mediante comunicado adjunto a este escrito, Protección S.A. remitió, respuesta de fondo en el caso, clara, detallada, precisa, punto por punto frente a lo pedido y que se envió a la dirección electrónica que **La señora MARIA TERESA RIVERA DE CORREA** expuso para notificaciones en su derecho de petición:

Enviado el: jueves, 8 de agosto de 2024 7:36 a. m.
Para: claudiapatricianavarro8@gmail.com
Asunto: Respuesta Derecho de Petición Afiliado Javier Correa Ospina
Datos adjuntos: SER - 08884708.pdf; Costas.pdf



Medellín, 8 de agosto de 2024

Señora
CLAUDIA PATRICIA NAVARRO MACIAS
Apoderada

Reciba un cordial saludo de Protección S.A.

De manera atenta y por medio de documentos adjuntos, damos respuesta a su requerimiento radicado en esta administradora.

Medellín: Cll. 49 No. 63 - 100 Medellín Torre Protección. Tel: (604) 230 7500 * Bogotá: Transv. 23 N. 97 - 73 piso 5 Edificio City Business. Tel: (601) 601 2525 - 601 3535 * Cali: Cll. 64 Norte No. 5B - 146 Centro Empresarial Local 47. Tel: (602) 608 0086 * Barranquilla: Cra. 52 No. 76 - 167 C.C. Atlantic Center Oficina 504 Locales 113 y 114. Tel: (605) 360 8929

www.proteccion.com * Línea de servicio Nacional 01 8000 52 8000 * NIT. 800.138.188-1

En dicha respuesta se brinda información sobre el trámite de cumplimiento de la orden proferida en el proceso ordinario.

De acuerdo con lo manifestado y teniendo en cuenta que esta administradora ha emitido respuesta en **forma clara, precisa y de fondo** a la petición elevada por **La señora MARIA TERESA RIVERA DE CORREA** y la ha puesto en su conocimiento según los datos de notificación suministrados, respetuosamente consideramos que **la presente acción de tutela debe ser denegada por carencia de objeto en lo que respecta a Protección S.A.** Sobre el particular, debe indicarse que recientemente la Corte Constitucional en **Sentencia T-002/21**, señaló:

La carencia actual de objeto genera la extinción del objeto jurídico de la tutela e implica que cualquier orden proferida por el juez caería en el vacío. Esta figura puede generarse por: i) el hecho superado; ii) el daño consumado; y, iii) la situación sobreviniente. En el daño consumado, surge para el juez de tutela el deber de pronunciarse de fondo y, si es del caso, adoptar medidas correctivas. En el caso del hecho superado y la situación sobreviniente, el juez podrá examinar el asunto con la finalidad de verificar la conformidad constitucional de la situación que dio origen al amparo, avanzar en la comprensión de un derecho fundamental y realizar la función de pedagogía constitucional, entre otros. En estos eventos, también puede proferir remedios adicionales.

En tal contexto, la configuración de un hecho superado hace innecesario el pronunciamiento del Juez, tal como la Corte Constitucional lo precisó en **SENTENCIA SU 522/19** al señalar:

“(...) si la situación de hecho que origina la violación o la amenaza ya ha sido superada en el sentido de que la pretensión erigida en defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha, la acción de tutela pierde eficacia y por lo tanto razón de ser.”

Resulta importante señalar también al despacho que, tal y como lo ha mencionado de manera reiterada la Corte Constitucional, el hecho de que los derechos de petición deban tener una repuesta de fondo, completa y clara; **no significa que la respuesta a los mismos, tenga que ser en todos los casos favorables a las solicitudes reclamadas**; en ese sentido la **Corte Constitucional en sentencia T-146/2012** manifestó: *“Sin embargo, se debe aclarar que, el derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea negativa”*. Igualmente, el máximo órgano constitucional en sentencia **T-332 de 2015**, efectuó un análisis sobre el derecho fundamental de petición y cuando se puede predicar que el mismo se encuentra vulnerando o salvaguardo; en esta medida, **la Corte constitucional indica que para entenderse satisfecho el derecho fundamental de petición, la respuesta debe cumplir con los siguientes requisitos: 1.Oportunidad, 2. Debe resolver de fondo, clara, precisa y de fondo lo solicitado, 3. Debe ser puesta en conocimiento del peticionario.**

Medellín: Cll. 49 No. 63 - 100 Medellín Torre Protección. Tel: (604) 230 7500 * Bogotá: Transv. 23 N. 97 - 73 piso 5 Edificio City Business. Tel: (601) 601 2525 - 601 3535 * Cali: Cll. 64 Norte No. 5B - 146 Centro Empresarial Local 47. Tel: (602) 608 0086 * Barranquilla: Cra. 52 No. 76 - 167 C.C. Atlantic Center Oficina 504 Locales 113 y 114. Tel: (605) 360 8929

www.proteccion.com * Línea de servicio Nacional 01 8000 52 8000 * NIT. 800.138.188-1

Por lo tanto, la Corte Constitucional sostiene que la respuesta que debe brindarse a los derechos de petición, para salvaguarda de este derecho fundamental, debe cumplir con los anteriores requisitos dentro de los cuales no implica que se tenga que aceptar lo solicitado; por ende, si la respuesta está ofreciendo una información de fondo, clara, precisa y congruente a lo pretendido, se satisface el derecho fundamental de petición, no pudiendo predicarse una vulneración del mismo, bajo el argumento de que este no accedió o no fue favorable a la solicitud presentada, en tanto, tal y como lo sostiene el máximo órgano constitucional, lo anterior no es una condición *Sine qua non* para que se pueda entender garantizado el derecho fundamental de petición. Sobre el particular la Corte en sentencia T-332 de 2015 indicó:

“(...)La Corte Constitucional se ha referido en distintas oportunidades a la importancia de esta garantía fundamental, cuya efectividad, según se ha reconocido, “resulta indispensable para el logro de los fines esenciales del Estado, particularmente el servicio de la comunidad, la promoción de la prosperidad general, la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y la participación de todos en las decisiones que los afectan, así como para asegurar que las autoridades cumplan las funciones para las cuales han sido instituidas (artículo 2o. Constitución Política)”[7]

A partir de esta garantía la jurisprudencia ha fijado una serie de reglas y de parámetros relacionados con el alcance, núcleo esencial y contenido de este derecho. Al respecto ha precisado lo siguiente:

(...)

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita”

Finalmente, debe resaltarse que el derecho de petición no es el mecanismo correspondiente para elevar solicitudes de prestaciones económicas, pensionales o tramites especializados como calificación de pérdida de capacidad laboral, traslado de régimen u otros, toda vez que este tipo de solicitudes corresponden a peticiones frente a las cuales existe norma legal especial de regulación que consagra el procedimiento que debe surtir para dar respuesta a las mismas; en esta medida, al existir norma legal especial, por ejemplo en el caso de referencia, la solicitud tiene un tratamiento diferente al regulado por el **artículo 14 de la Ley 1755 de 2015**, no siendo aplicable para el presente caso entonces ni siquiera el termino general de 15 días hábiles para contestar los derechos de petición regulados por dicha norma. Incluso el **artículo 14 de la Ley 1755 de 2015**, prevé lo anterior, al indicar que los términos que consagra dicha norma, para contestar los derechos de petición, no se aplicarán frente a peticiones en las que existe una norma legal especial que regule un término diferente, evento en el cual, se aplicará lo preceptuado por la norma legal especial.

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE UN PROCESO ORDINARIO LABORAL.

Es importante resaltar que, respecto a la solicitud de cumplimiento de la sentencia ordinaria, esta acción constitucional **NO ES PROCEDENTE** porque existe un mecanismo especial diseñado por el legislador para satisfacer dichas pretensiones: el **proceso ejecutivo laboral**. Dicho proceso contiene términos más expeditos, que garantizan una decisión en tiempo, sin que ocurra un perjuicio irremediable; sin embargo, el accionante, no ha demostrado siquiera con prueba sumaria, las razones por las que dicho procedimiento no resulta útil en el caso concreto, ni que exista un perjuicio irremediable que justifique el accionar constitucional. De la misma manera, no acredita siquiera sumariamente las razones por las cuales el accionante, sería un sujeto de especial protección constitucional, para acudir a la acción de tutela como mecanismo principal y no subsidiario. En este sentido, la Corte Constitucional explica en la sentencia T-261 de 2018, en los siguientes términos:

En cuanto a las obligaciones de hacer, el juez constitucional debe valorar la capacidad que realmente tiene el juez ordinario para exigir el cumplimiento de una conducta específica, pues el proceso ejecutivo no consagra las mismas garantías respecto a esta clase de obligaciones, como sí lo hace en las de pago de una suma de dinero, por lo que el mecanismo tutelar es adecuado al constatarse que existe un riesgo cierto de los derechos fundamentales por cuanto no existe otro medio eficaz para hacerlo cumplir.

Ahora bien, lo anterior no significa que la acción de tutela siempre proceda para ordenar el cumplimiento de una sentencia que contiene una obligación de hacer; la naturaleza subsidiaria de la acción constitucional siempre prevalece y, por esa razón, además de la naturaleza de la obligación, debe constatarse que existe un riesgo cierto para los derechos fundamentales del accionante o el posible acaecimiento de un perjuicio irremediable.

Frente a las obligaciones de dar, el proceso ejecutivo es el medio ordinario eficaz con el cual se obliga a la administración al cumplimiento de la sentencia y con él asegurar el pago de lo debido, pues su naturaleza coactiva y las medidas fijadas en la ley garantizan de una manera más eficaz el cumplimiento de las órdenes judiciales.

Es por ello que por regla general, la tutela no procede cuando lo pretendido es el cumplimiento de un fallo judicial que contiene obligaciones de dar; sin embargo, de manera excepcional, en las obligaciones de dar se considera la procedencia tutelar, como mecanismo subsidiario, cuando se evidencie la configuración de un perjuicio irremediable por la afectación a los derechos fundamentales al mínimo vital y la dignidad humana en relación con reconocimiento y pago de derechos prestacionales y al evaluarse de manera estricta la eficacia del proceso ejecutivo.

De otro lado también la Corte Constitucional en la sentencia **T-342 de 2002** ha establecido que el proceso ejecutivo laboral es el mecanismo ordinario por excelencia para solicitar el cumplimiento de las obligaciones de dar que se hayan establecido por sentencia judicial:

Medellín: Cll. 49 No. 63 - 100 Medellín Torre Protección. Tel: (604) 230 7500 * Bogotá: Transv. 23 N. 97 - 73 piso 5 Edificio City Business. Tel: (601) 601 2525 - 601 3535 * Cali: Cll. 64 Norte No. 5B - 146 Centro Empresarial Local 47. Tel: (602) 608 0086 * Barranquilla: Cra. 52 No. 76 - 167 C.C. Atlantic Center Oficina 504 Locales 113 y 114. Tel: (605) 360 8929

“(…) el proceso ejecutivo sí constituye el mecanismo idóneo para reclamar obligaciones de dar, especialmente las de contenido económico, pues su naturaleza coactiva y el conjunto de medidas fijadas en la legislación, aseguran el cumplimiento de este tipo de condenas, ya sea a cargo del demandado, a expensas de otro e, inclusive, por medio del secuestro y entrega de bienes.”

Se concluye pues que la respuesta de fondo no puede entenderse en ningún caso como el cumplimiento mismo de la sentencia del proceso ordinario, pues ello sería desnaturalizar completamente el proceso ejecutivo laboral. Y más recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia **T-005 de 2015** se ha pronunciado enfáticamente de la siguiente manera:

(...) Situación contraria ocurre cuando se encuentra incorporada una obligación de dar. La jurisprudencia constitucional ha afirmado que **el ordenamiento jurídico contempla un mecanismo principal e idóneo para exigir el cumplimiento de éste tipo de obligaciones como lo son los procesos ejecutivos**. Al respecto, la Corte ha señalado *“que el proceso ejecutivo tiene la virtualidad de obtener el forzoso cumplimiento de aquello que se quiere eludir, mediante la aplicación de medidas que, como el embargo y posterior remate de los bienes del deudor, están en manos del juez, quien las lleva adelante pese a la resistencia del demandado, en los casos y dentro de las reglas procesales pertinentes”*.

De esta manera, se puede concluir que el primer estudio que debe llevar a cabo el juez constitucional cuando resuelva una tutela cuya pretensión principal radique en el cumplimiento de una providencia judicial, es determinar el tipo de obligación que consagra la orden del fallo.

Ahora bien, **lo anterior no significa que la acción de tutela siempre proceda para ordenar el cumplimiento de una sentencia que contiene una obligación de hacer; la naturaleza subsidiaria de la acción constitucional siempre prevalece** y, por esa razón, además de la naturaleza de la obligación, debe constatarse que existe un riesgo cierto para los derechos fundamentales del accionante o el posible acaecimiento de un perjuicio irremediable.

Aceptar una tesis distinta implicaría admitir que la tutela opera como un mecanismo ordinario dentro de los procesos judiciales, desnaturalizando así la acción. Este postulado cobra mayor fuerza cuando la obligación de hacer que se pretende hacer cumplir, tiene un carácter netamente monetario; en estos casos la Corte no puede admitir la procedencia automática de la acción de tutela, toda vez que hacerlo desnaturalizaría la acción. En consecuencia, al igual que en cualquier otra circunstancia puesta en conocimiento del juez constitucional, es menester realizar un estudio para determinar la real afectación de los derechos.

De otro lado, el máximo órgano de cierre de la jurisdicción laboral, también ha dejado ver la improcedencia de la solicitud de cumplimiento de las sentencias declarativas mediante acciones de tutela. Al respecto en la sentencia CSJ STL8918-2019 se dijo:

Esta Corporación ha reiterado que las especiales características de subsidiariedad y residualidad de la acción de tutela, impiden utilizarla como mecanismo para lograr la intervención del juez constitucional en procesos en trámite y, de esta manera, reemplazar los procedimientos ordinarios de defensa, pues el amparo se concibió precisamente para suplir la ausencia de estos y no para resquebrajar los existentes; todo lo cual impide considerarla como medio alternativo o paralelo de defensa o instancia adicional a la cual acudir para enderezar actuaciones judiciales supuestamente viciadas.

En este contexto, la acción de tutela no es procedente por regla general para lograr la ejecución de sentencias declarativas, dado que la vía preferente e idónea en esos casos es el proceso ejecutivo laboral que prevé el artículo 100 y siguientes del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. De este modo, no es viable que a continuación del proceso ordinario se acuda al juez de tutela para que materialice la sentencia respectiva, pues esa competencia la tiene el juez de ejecución, que cuenta con instrumentos eficaces para el logro del tal fin, por ejemplo, el decreto de medidas cautelares que garanticen el cumplimiento de la obligación de conformidad con el artículo 104 de aquel estatuto.

REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Resáltese al juzgado que la acción constitucional de la referencia no cumple con las condiciones mínimas para su interposición y todas las consecuencias que de esta podrían derivarse contra mi representada Protección S.A., eso es, no cumple con los siguientes elementos o requisitos de procedibilidad sine qua non para el ejercicio de dicha acción legal, por lo cual la misma debe tenerse por improcedente.

- **Improcedencia de la acción de tutela por no cumplirse el requisito de Subsidiariedad.**

La presente acción de tutela debe ser declarada **IMPROCEDENTE**, conforme a lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, la cual prevé: *“Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”* Así mismo el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, precisa que el amparo constitucional será improcedente, **cuando existan otros medios eficaces de defensa judicial** para resolver la situación particular en la que se encuentre la parte actora.

Al respecto, La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, presidida por la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, **mediante Sentencia T-503-19**, determinó que:

“Cuando una persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que debe conocer un determinado asunto radicado bajo su competencia, dentro del marco estructural de la administración de justicia”.

Así mismo, la Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, presidida por la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, en sentencia T-117 de 1992 había señalado que:

“ La tutela no ha sido consagrada para provocar la iniciación de procesos alternativos o sustantivos de los ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, ni para otorgar a los litigantes la acción de rescatar pleitos ya perdidos, sino que tiene el propósito claro y definitivo, estricto y específico, que el propio artículo 86 de La Constitución indica, que no es otro diferente de brindar a la persona protección inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la carta le reconoce”.(Subrayas fuera de texto)

Así las cosas, cabe señalar que el amparo constitucional no es un mecanismo alternativo para lograr la protección de derechos, sino un medio residual y subsidiario, supeditado a la falta recursos o medios de defensa judicial que permitan hacer valer las pretensiones del afectado, salvo que se utilice como mecanismo transitorio ante la presencia de un perjuicio irremediable, **el cual no se comprueba en caso de referencia.**

Quiere decir lo anterior que la tutela es un mecanismo subsidiario que debe ser utilizado sólo cuando los procedimientos legales resultan ineficaces o cuando no existen otros medios de defensa y en forma transitoria para evitar un perjuicio irremediable, lo cual no se demuestra en el caso de la referencia y puntualmente respecto a las pretensiones incoadas por **La señora MARIA TERESA RIVERA DE CORREA**, frente a lo cual el legislador ya ha previsto otras acciones legales específicas con el fin de que las personas soliciten el cumplimiento de sus derechos, acudiendo ante la jurisdicción ordinaria laboral.

- **Improcedencia de la acción de tutela por no cumplirse el requisito de Perjuicio irremediable.**

De acuerdo con los requisitos de procedibilidad de tutela descritos con detalle en la **Sentencia T - 641 de 2014 de La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional**, en el presente caso no se configuran los criterios para determinar la configuración de un perjuicio irremediable, pues el perjuicio en este tipo de casos debe ser:

- **Inminente o próximo a suceder.** Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño.
- El perjuicio ha de ser **grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo** para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica.

- **Deben requerirse medidas urgentes para superar el daño**, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso.
- **Las medidas de protección deben ser imposterables**, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.

En ese sentido ha manifestado también la jurisprudencia de la Corte Constitucional mediante sentencias **T-472 de 2017** y **C- 132 de 2018** lo siguiente:

También ha dicho la Corte que la ponderación del perjuicio irremediable debe consultar las particularidades del caso concreto, a fin de definir la falta de idoneidad del mecanismo judicial ordinario y analizar, frente a las condiciones personales del peticionario, la intensidad sobre la inminencia del perjuicio irremediable para determinar qué derechos fundamentales se encuentran vulnerados. Para ello la jurisprudencia constitucional ha dispuesto ciertos requisitos que deberá ser valorado por el juez en cada caso concreto:

- (i) Se trata de una persona de la tercera edad, considerada sujeto de especial protección;*
- (ii) El estado de salud del solicitante y su familia;*
- (iii) Las condiciones económicas del peticionario;*
- (iv) La falta de pago de la prestación o su disminución, genera un alto grado de afectación de los derechos fundamentales, en particular del derecho al mínimo vital.*
- (v) El afectado ha desplegado cierta actividad administrativa y judicial, tendiente a obtener la protección de sus derechos, y*
- (vi) El interesado acredita, siquiera sumariamente, las razones por las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados.*

Ahora bien, nótese que, según las sentencias **T -1619-00** y **T 579 -97** la Corte Constitucional ya había expresado que, **si no se comprueba una amenaza o vulneración, la acción de tutela debe ser declarada improcedente.** Lo que traduce en que la acción u omisión debe ser concreta respecto de amenaza o vulneración de derechos y debe recaer directamente en una persona, por lo que no es viable entonces por ejemplo llegar a alegar una afectación transitoria.

Aplicado lo anterior al caso concreto, se establece con claridad que la parte tutelante, no acredita, siquiera sumariamente, las razones por las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados.

- Improcedencia de la acción de tutela por pretensión de conflicto económico.

Del escrito de tutela se desprende que el interés de fondo en el caso corresponde a un conflicto netamente económico y la tutela no es el mecanismo idóneo para buscar la Protección jurídica pretendida, así las cosas, para resolver la controversia suscitada, por La señora MARIA TERESA RIVERA DE CORREA necesariamente debe acudir a justicia ordinaria. Así lo ha reiterado la Honorable Corte Constitucional por ejemplo mediante **sentencia T-114 de 2013:**

“2.3. Afectación de derechos fundamentales

2.3.1. La acción de tutela tiene como objeto la protección de derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados. De lo anterior se desprende que no es viable el recurso de amparo: (i) cuando no tenga como pretensión principal la defensa de garantías fundamentales; o (ii) cuando la acción u omisión que atenta contra las mismas no sea actual, es decir, cuando ha cesado o se ha consumado.

2.3.1.1. En desarrollo del primer supuesto, esta Corporación ha señalado reiteradamente que:

“Las controversias por elementos puramente económicos, que dependen de la aplicación al caso concreto de las normas legales –no constitucionales– reguladoras de la materia, exceden ampliamente el campo propio de la acción de tutela, cuyo único objeto, por mandato del artículo 86 de la Constitución y según consolidada jurisprudencia de esta Corte, radica en la protección efectiva, inmediata y subsidiaria de los derechos constitucionales fundamentales, ante actos u omisiones que los vulneren o amenacen.

En consecuencia, el rechazo de la acción de tutela por improcedente, respecto de la pretensión de orden económico, es lo que impone la Carta Política (C.P., art. 86), en la medida en que no se trata de la vulneración de un derecho fundamental y dado que el interesado cuenta con la acción y los recursos ordinarios necesarios.”.

2.3.1.2. En ese mismo sentido ha manifestado que:

“Constituye regla general en materia del amparo tutelar, que la jurisdicción constitucional debe pronunciarse sobre controversias de orden estrictamente constitucional; por lo tanto, resultan ajenas a la misma las discusiones que surjan respecto del derecho..., cuando el mismo es de índole económica, en tanto que las discusiones de orden legal escapan a ese radio de acción de garantías superiores, pues las mismas presentan unos instrumentos procesales propios para su trámite y resolución. (Subrayas por fuera del texto original).

MARCO NORMATIVO

DERECHO DE PETICIÓN:

- ✓ Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia – Derecho de petición.
- ✓ Sentencia T-002- 21 - Corte Constitucional - Carencia actual de objeto.
- ✓ Sentencia SU 522- 19- Corte Constitucional - Hecho superado.
- ✓ Sentencia T-146-2012 - Corte Constitucional - Derecho de petición no implica obligación definir favorablemente las pretensiones del solicitante.
- ✓ Sentencia T-332 -2015- Corte Constitucional - Reglas para Entenderse Satisfecho el derecho de petición.
- ✓ Artículo 16 de la Ley 1755 de 2015 - Contenido de las peticiones.
- ✓ Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 - Inaplicación de norma frente a peticiones en las que existe una norma legal especial que regula un término diferente.
- ✓ Parágrafo del Artículo 24 de la Ley 1755 de 2015- Necesidad de autorización expresa para acceder a información reservada.
- ✓ Circular Externa 052 de 2007- Superintendencia Financiera de Colombia- Requerimientos mínimos de seguridad y calidad en el manejo de la información de las entidades vigiladas – confidencialidad.
- ✓ Artículo 7, literal i) de la Ley 1328 de 2009 - Reserva de la información.
- ✓ Ley estatutaria 1581 de 2012 - Protección de datos personales.
- ✓ Artículo 4, Ley estatutaria 1581 de 2012- Principio de confidencialidad que obliga a las entidades privadas a garantizar y proteger la información que tiene el carácter de reserva.
- ✓ Artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 en los numerales 3 y 5- Informaciones y documentos reservados.
- ✓ T-875 - 2010- Corte Constitucional – Nadie está obligado a lo imposible.

REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD:

- ✓ Artículo 86 de la Constitución Política de Colombia de 1991 – Derecho a la acción de tutela.
- ✓ Numeral 1º del Artículo 6º del Decreto 2591 de 1991- Subsidiariedad de la acción de tutela.
- ✓ Sentencia T-503-19 - Corte Constitucional - Subsidiariedad e inmediatez de la acción de tutela.
- ✓ Sentencia T-117 de 1999 - Corte Constitucional-
- ✓ Sentencias T-472 de 2017 y C- 132 de 2018 de la Corte Constitucional- Perjuicio irremediable.
- ✓ Sentencia T - 641 de 2014 - Corte Constitucional - Perjuicio irremediable
- ✓ Sentencias T -1619-00 y T 579 -97 - Corte Constitucional- Necesidad de prueba de amenaza o vulneración de derechos.
- ✓ Sentencia T-291 de 2017- Corte Constitucional -Inmediatez.
- ✓ Artículo 100 del Código General del Proceso Ley 1564 de 2012, numeral 8 – Pleito pendiente.

CONSIDERACIONES

De acuerdo con lo anterior, esta Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías ha obrado de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales, razón por la cual no observa conducta alguna que constituya o se erija en la violación de algún derecho fundamental o legal **de La señora MARIA TERESA RIVERA DE CORREA pues el derecho de petición fue resuelto brindando una respuesta de fondo clara, completa y suficiente a la petición.** En todo caso, téngase en cuenta que la acción de tutela resulta **IMPROCEDENTE PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE UN PROCESO ORDINARIO LABORAL.**

En todo caso, se debe tener en consideración que **desde el momento de la ejecutoria de la sentencia en el proceso ordinario laboral, Colpensiones debía pagar al señor Javier Correa Ospina la pensión de vejez y en consecuencia, considerarlo como su afiliado pensionado, por lo tanto, la solicitud pensional que desea elevar la señora MARIA TERESA RIVERA DE CORREA como supuesta cónyuge del señor Javier Correa Ospina la debe dirigir ante Colpensiones** para efectos de que resuelva si tiene derecho o no a la sustitución pensional de la prestación económica que devengaba el señor Javier Correa Ospina y que le fue ordenada a pagar a Colpensiones desde antes de su fallecimiento, esto considerando que se consideró como ejecutoriada la sentencia en el mes de febrero del 2024 cuando se declaró desierto el recurso de casación y el señor Javier Correa Ospina murió en el mes de marzo del 2024.

También se debe considerar que ninguna de las ordenes impuestas en el proceso ordinario laboral fueron supeditadas entre sí, por lo que es claro que, desde el momento en el que quedó en firme la sentencia, el señor Javier Correa Ospina se consideró como pensionado en Colpensiones, esto de conformidad con la declaración de que el demandante NUNCA estuvo afiliado al RAIS y por ende, a esta Administradora, adicionalmente, la sentencia de segunda instancia ordenó de forma expresa que desde el momento de la ejecutoria, Colpensiones debía pagar de forma completa la pensión de vejez.

Por lo anterior, no existe fundamento jurídico alguno para que Colpensiones se abstuviera de pagar la mesada pensional al señor Javier Correa Ospina y que impida que la accionante solicite la sustitución pensional a la que podría tener derecho.

Esperamos de esta manera haber aclarado la situación de La señora MARIA TERESA RIVERA DE CORREA, no obstante, permanecemos a disposición de ese Despacho para lo que se estime pertinente. En caso de requerir información adicional o notificar algún tipo de providencia puede llevarse a cabo a través del correo electrónico institucional: accioneslegales@proteccion.com.co.

ANEXOS

- Certificado de existencia y representación legal.
- Constancia de envío de respuesta.
- Respuesta a la petición.

Cordialmente,



Daniel Giraldo Giraldo
Representante Legal Judicial
Protección S.A
DSZC

David Santiago Zapata Ceballos

De: clientes@proteccion.com.co
Enviado el: jueves, 8 de agosto de 2024 7:36 a. m.
Para: claudiapatricianavarro8@gmail.com
Asunto: Respuesta Derecho de Petición Afiliado Javier Correa Ospina
Datos adjuntos: SER - 08884708.pdf; Costas.pdf



Medellín, 8 de agosto de 2024

Señora

CLAUDIA PATRICIA NAVARRO MACIAS

Apoderada

Reciba un cordial saludo de Protección S.A.

De manera atenta y por medio de documentos adjuntos, damos respuesta a su requerimiento radicado en esta administradora.

Le recordamos que todos los canales de servicio están a su disposición; puede comunicarse con el Asesor Virtual Pronto en nuestro Portal Web www.proteccion.com y App o comunicarse con la Línea de Servicio: en Bogotá (601) 744 44 64 – Medellín (604) 510 90 99 – Cali (602) 386 00 80 – Barranquilla (605) 319 79 99 – Cartagena (605) 642 49 99 – WhatsApp +57 310 220 5575 y en el resto del país desde un teléfono fijo 01 8000 52 8000.

Atentamente,

Equipo Atención de PQR

Protección S.A.

Por favor no responder este mensaje, este buzón es sólo de salida



thread::AXlOJAFULmiL7iBVolyY4WQ::

Protección

Medellín, 8 de agosto de 2024

Rad. SER - 08884708

Señora

CLAUDIA PATRICIA NAVARRO MACIAS

Apoderada

claudiapatricianavarro8@gmail.com

Asunto: Respuesta Derecho de Petición.

Afiliado: Javier Correa Ospina CC 14957833.

Reciba un cordial saludo de Protección S.A.

De manera atenta damos respuesta a su petición radicada en esta administradora, en calidad de apoderada del señor, **JAVIER CORREA OSPINA**, por medio de la cual solicita el cumplimiento de la sentencia del proceso ordinario que declaro nulidad de afiliación y traslado a Colpensiones.

En calidad de Apoderada Judicial del Señor JAVIER CORREA OSPINA, me permito allegar poder debidamente legalizado a fin de que se me reconozca personería jurídica para actuar administrativamente ante Ustedes.

Igualmente entrego el Auto No. 206 del 18 de marzo del año en curso, que fue notificado el 19 de marzo, que ordena SE CUMPLA lo resuelto por la HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala de casación Laboral que su Providencia AL-487-2024 del 14 de febrero del 2024 declaró DESIERTO el Recurso de Casación solicitado por esta AFP.

Al respecto, le confirmamos que Protección S.A. tiene conocimiento de las sentencias proferidas a su favor, se revisó el proceso y este ya finalizó.

En consecuencia, se indica que, para realizar cumplimiento a la sentencia judicial, esta Administradora, se encuentra adelantando todas las gestiones operativas pertinentes para darle cabal cumplimiento a la orden judicial, aclarando que el señor, Javier Correa Ospina, se encuentra pensionado mediante la modalidad de renta vitalicia, es decir por medio de una aseguradora, lo que implica que las gestiones a realizar no dependen de Protección únicamente, porque los recursos del afiliado-pensionado, se encuentran en la aseguradora:

Todos los canales de servicio están a su disposición. Si lo requiere, comuníquese con la Línea de Servicio: en Bogotá (601) 744 44 64 - Medellín (604) 510 90 99 - Cali (602) 386 00 80 - Barranquilla (605) 319 79 99 - Cartagena (605) 642 49 99 - WhatsApp +57 310 220 5575 y en el resto del país desde un teléfono fijo 01 8000 52 8000.

Clasificación - Confidencial

Protección

Frente al tema es importante recordar que la **Modalidad de Renta Vitalicia** se encuentra establecida en la Ley 100 de 1993, específicamente en el artículo 80 y determina lo siguiente:

*La renta vitalicia inmediata, es la modalidad de pensión mediante la cual el afiliado o beneficiario contrata directa e irrevocablemente con la **aseguradora de su elección**, el pago de una renta mensual hasta su fallecimiento y el pago de pensiones de sobrevivientes en favor de sus beneficiarios por el tiempo a que ellos tengan derecho. Dichas rentas y pensiones deben ser uniformes en términos de poder adquisitivo constante y no pueden ser contratadas por valores inferiores a la pensión mínima vigente del momento.*

La administradora a la que hubiere estado cotizando el afiliado al momento de cumplir con las condiciones para la obtención de una pensión, será la encargada de efectuar, a nombre del pensionado, los trámites o reclamaciones que se requieran, ante la respectiva aseguradora.

Así las cosas, a continuación, relacionamos las gestiones que se están efectuando para dar cumplimiento a la orden:

- Cobro de los saldos del afiliado a la aseguradora en la cual se encuentra pensionado, Suramericana. **(En gestión pendiente pago).**
- Revocatoria de pensión **(Pendiente de gestión con la aseguradora)**
- Anulación e inactivación de la cuenta en Protección. **(Pendiente gestiones de la cuenta pensional)**
- Reporte de novedad de la anulación de las vinculaciones de Protección ante SIAFP, Sistema de Información de Afiliados a Fondos de Pensiones, para que solo quede la vinculación en Colpensiones. **(Pendiente gestiones de la cuenta pensional)**
- Revisión y pago de todos sus aportes a Colpensiones (Incluyendo el pago al Fondo de Garantía de Pensión Mínima). **(Pendiente gestiones de la cuenta pensional)**

Protección

- Pago de comisión de administración **confirmamos que ya se efectuó el pago a Colpensiones por concepto de comisión, por valor de \$903.807 el 9 de octubre de 2023.**
- Reporte del pago ante SIAFP, por medio de archivos planos, para que migre la información a Colpensiones. **(Pendiente gestiones de la cuenta pensional)**

Por lo cual, para realizar cumplimiento a la sentencia judicial, esta Administradora, se encuentra realizando todos los tramites operativos requeridos para finalmente efectuar su traslado hacia Colpensiones, **aclarando que dependemos de la aseguradora para finalizar las gestiones.**

Así las cosas, de acuerdo con la sentencia de segunda instancia en el proceso ordinario laboral, las únicas obligaciones a cargo de esta AFP eran las siguientes:

1 ORDENAR que la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍA PROTECCIÓN S.A. deberá devolver los gastos de administración que haya cobrado durante el tiempo en que estuvo afiliado el demandante, junto con las primas pagadas por los seguros previsionales de cualquier índole, el porcentaje cobrado por concepto de garantía de pensión mínima. Todos estos valores deben ser devueltos junto con los rendimientos que hayan producido.

Por lo que se reitera, que el pago del aporte de la **Garantía de Pensión Mínima** correspondiente se traslada con todos los recursos de cotizaciones del afiliado, lo que está pendiente de la aseguradora por la cual se encuentra pensionado.

Respecto de las **primas de sobrevivencia e invalidez**, indicamos que, son dineros que se pagan a terceros de buena fe y, por ende, no hay lugar a la devolución de los mismos.

Por otro lado, informamos que el pago de los **gastos de administración** fue realizado el pago por valor de \$903.807 el 9 de octubre de 2023 a Colpensiones.

Finalmente, respecto al pago de las **costas judiciales**, le confirmamos que estas fueron pagadas a la cuenta de depósitos judiciales el 17 de junio de 2024, como se detalla en la constancia adjunta.

Todos los canales de servicio están a su disposición. Si lo requiere, comuníquese con la Línea de Servicio: en Bogotá (601) 744 44 64 - Medellín (604) 510 90 99 - Cali (602) 386 00 80 - Barranquilla (605) 319 79 99 - Cartagena (605) 642 49 99 - WhatsApp +57 310 220 5575 y en el resto del país desde un teléfono fijo 01 8000 52 8000.

Protección

Ahora bien, con respecto a la obligación a cargo de **COLPENSIONES**, debe tenerse en cuenta que NO existe duda que desde el momento en el que quedó en firme la sentencia, el señor **Javier Correa Ospina se consideró como pensionado en Colpensiones**, esto de conformidad con la sentencia en el ordinario que declaró que el demandante NUNCA estuvo afiliado al RAIS y por ende, a esta Administradora, adicionalmente, la sentencia de segunda instancia ordenó de forma expresa que desde el momento de la ejecutoria, Colpensiones debía pagar de forma completa la pensión de vejez, aclarando que esta orden no supeditó el cumplimiento a los trámites administrativos que se deben adelantar entre Protección como AFP, Suramericana como aseguradora en la renta vitalicia y Colpensiones como entidad que debía pagar la pensión de vejez al señor Javier Correa Ospina.

Por lo anterior, se debe reiterar que desde el momento de la ejecutoria, **Colpensiones debía pagar al señor Javier Correa Ospina la pensión de vejez y en consecuencia, considerarlo como su afiliado pensionado, por lo tanto, la solicitud pensional que está elevando la señora MARIA TERESA RIVERA DE CORREA como supuesta cónyuge del señor Javier Correa Ospina la debe dirigir ante Colpensiones para efectos de que resuelva si tiene derecho o no a la sustitución pensional de la prestación económica que devengaba el señor Javier Correa Ospina y que le fue ordenada a pagar a Colpensiones desde antes de su fallecimiento**, esto considerando que se consideró como ejecutoriada la sentencia en el mes de febrero del 2024 cuando se declaró desierto el recurso de casación y el señor Javier Correa Ospina murió en el mes de marzo del 2024.

Le recordamos que todos los canales de servicio están a su disposición; puede comunicarse con el Asesor Virtual Pronto en nuestro Portal Web www.proteccion.com y App o comunicarse con la Línea de Servicio: en Bogotá (601) 744 44 64 – Medellín (604) 510 90 99 – Cali (602) 386 00 80 – Barranquilla (605) 319 79 99 – Cartagena (605) 642 49 99 – WhatsApp +57 310 220 5575 y en el resto del país desde un teléfono fijo 01 8000 52 8000.

Cordialmente,

Doris Grajales C.

Doris Grajales Castrillón

Equipo Atención de PQR

Protección S.A.

Anexos (1): Detalle de pago de costas.

Todos los canales de servicio están a su disposición. Si lo requiere, comuníquese con la Línea de Servicio: en Bogotá (601) 744 44 64 - Medellín (604) 510 90 99 - Cali (602) 386 00 80 - Barranquilla (605) 319 79 99 - Cartagena (605) 642 49 99 - WhatsApp +57 310 220 5575 y en el resto del país desde un teléfono fijo 01 8000 52 8000.

Clasificación - Confidencial

Protección

DETALLE DE PAGO DE COSTAS

Banco Agrario de Colombia	
Detalle de Archivo de Carga de Depósitos Masivos.	
Fecha de Carga: 2024/06/17	
Fecha Elaboración	20240617
Ofic. Origen	30
Ofic. Destino	6903
Concepto	1
Nro. Proceso	0
Cuenta Judicial	760012032007
Nro. Cuenta de Ahorros	0
Valor Deposito	\$2.556.232
Identificación Demandante	14957833
Demandante	JAVIER CORREA OSPINA
Identificación Demandado	8001381881
Demandado	PROTECCION SA
Nro. de Proceso	76001310500720180053200

Cordialmente,

Doris Grajales C.

Doris Grajales Castrillón
Equipo Atención de PQR
Protección S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Todos los canales de servicio están a su disposición. Si lo requiere, comuníquese con la Línea de Servicio: en Bogotá (601) 744 44 64 - Medellín (604) 510 90 99 - Cali (602) 386 00 80 - Barranquilla (605) 319 79 99 - Cartagena (605) 642 49 99 - WhatsApp +57 310 220 5575 y en el resto del país desde un teléfono fijo 01 8000 52 8000.

Clasificación - Confidencial



Superintendencia Financiera de Colombia

La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co con el número de PIN

Certificado Generado con el Pin No: 3288635162309594

Generado el 01 de octubre de 2024 a las 09:34:06

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN
EL SECRETARIO GENERAL**

En ejercicio de las facultades y, en especial, de la prevista en el artículo 11.2.1.4.59 numeral 10 del decreto 2555 de 2010, modificado por el artículo 3 del decreto 1848 de 2016.

CERTIFICA

**RAZÓN SOCIAL: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A.
sigla PROTECCION**

NIT: 800138188-1

NATURALEZA JURÍDICA: Sociedad Anónima De Nacionalidad Colombiana. Entidad sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CONSTITUCIÓN Y REFORMAS: Escritura Pública No 3100 del 12 de agosto de 1991 de la Notaría 11 de MEDELLIN (ANTIOQUIA). bajo la denominación Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. sigla Protección

Resolución S.F.C. No 1850 del 14 de noviembre de 2012 . la Superintendencia Financiera de Colombia no objeta la fusión por absorción de ING Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía S.A. por parte de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía PROTECCIÓN S.A., protocolizada mediante escritura pública 2086 del 26 de diciembre de 2012 notaría 14 de Medellín

Resolución S.F.C. No 1554 del 01 de noviembre de 2022 autoriza la escisión parcial de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA PROTECCION S.A., de conformidad con la solicitud presentada, en los términos del numeral 4º del artículo 71 del EOSF.

AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO: Resolución S.B. 3504 del 27 de septiembre de 1991

Resolución S.B. 3504 del 07 de septiembre de 1991 autoriza administrar Fondos de Cesantías Protección, identificado con Nit No. 800.170.494-5.

Oficio 92005423-16 del 09 de noviembre de 1992 , la Superintendencia Bancaria autoriza la constitución del Fondo de Pensiones de Jubilación Smurfit de Colombia.

Oficio 92005423-26 del 09 de marzo de 1993 la Superintendencia Bancaria autoriza Fondo de Pensiones Voluntarias, identificado con Nit No. 800.198.281-5.

Resolución S.B. 0570 del 06 de abril de 1994 Concedió a dicha sociedad autorización para administrar Fondos de Pensiones Obligatorias del régimen de Ahorro Individual con solidaridad. En virtud de lo dispuesto por la Ley 1328 del 15 de Julio de 2009, se adoptó el esquema de Multifondos en el régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, por lo tanto los tipos de Fondos de Pensiones son: El Fondo de Pensiones Obligatorias Protección Moderado, identificado con Nit No. 800.229.739-0, el Fondo de Pensiones Obligatorias Protección Mayor Riesgo, identificado con Nit No. 900.379.896-4, el Fondo de Pensiones Obligatorias Protección Conservador, identificado con Nit No. 900.379.759-3 y el Fondo de Pensiones Obligatorias Protección Retiro Programado, identificado con Nit No. 900.379.921-0.

Oficio 2007022892-002 del 17 de mayo de 2007 , la Superintendencia Bancaria autoriza administrar el Fondo de Pensiones XM.



Certificado Generado con el Pin No: 3288635162309594

Generado el 01 de octubre de 2024 a las 09:34:06

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

REPRESENTACIÓN LEGAL: La Representación Legal de la sociedad será múltiple y estará simultáneamente a cargo de cada uno de los siguientes empleados, quienes la ejercerán por sí solos: a) De un PRESIDENTE, que será elegido para un periodo de DOS (2) años por la JUNTA DIRECTIVA. A su cargo estará también la administración general de la sociedad. b) De uno o más Vicepresidentes y que serán, nombrados por la JUNTA DIRECTIVA en cualquier tiempo, y para los cuales dicho órgano en el acto de nombramiento determinará si ostentan la calidad de Representante Legal de la Sociedad. c) De uno o más Gerentes Regionales, que serán nombrados por el PRESIDENTE en cualquier tiempo y ejercerán la Representación Legal de la Sociedad en cuanto a los negocios propios de sus oficinas y de acuerdo con la delegación de funciones que les confiera el PRESIDENTE o alguno de los Vicepresidentes con Representación Legal. Los Gerentes Regionales tendrán también la representación Legal de la Sociedad para atender en su nombre las audiencias de conciliación y tendrán bajo su responsabilidad administrativa una, o más sucursales, agencias u oficinas. Corresponde al PRESIDENTE determinar el territorio en el cual ejercerán su jurisdicción y las Sucursales, agencias, u oficinas que quedarán bajo su dependencia administrativa. d) De uno o más Gerentes de Sucursal, agencia u oficina, que serán nombrados por el PRESIDENTE y ejercerán la representación legal de la sociedad en cuanto a los negocios propios de su oficina y de acuerdo con la delegación de funciones que les confiera el PRESIDENTE o alguno de los Vicepresidentes con Representación Legal. **PARÁGRAFO 1º** Para efectos de la Representación Legal Judicial de la Sociedad, tendrán igualmente la calidad de Representantes Legales judiciales el Director Procesal y el Jefe de Cobro Jurídico, quienes representarán a la sociedad ante las autoridades jurisdiccionales, administrativas, políticas, entidades centralizadas y descentralizadas del Estado. Igualmente, serán Representantes Legales Judiciales para los exclusivos efectos de representar a la Sociedad en las Audiencias de Conciliación judiciales o extrajudiciales, para absolver interrogatorios de parte, para recibir notificaciones, tanto ante autoridades jurisdiccionales, administrativas, políticas, entidades centralizadas y descentralizadas del Estado, los abogados u otras personas que con tal fin designe la JUNTA DIRECTIVA. **FUNCIONES DEL PRESIDENTE:** Son funciones del PRESIDENTE: 1. Representar legalmente la Sociedad y tener a su cargo la inmediata dirección y administración de sus negocios. 2. Celebrar en nombre de la Sociedad todos los contratos relacionados con su objeto social. 3. Ejecutar y hacer cumplir las decisiones de la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS y de la JUNTA DIRECTIVA. 4. Nombrar y remover libremente los empleados de sus dependencias, así como a los demás que le corresponda nombrar y remover en ejercicio de la delegación de funciones que pueda hacerle la JUNTA DIRECTIVA. 5. Constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales que considere necesarios para representar a la Sociedad. 6. Adoptar las medidas necesarias para la debida conservación de los bienes sociales y para el adecuado recaudo y aplicación de sus fondos, vigilar y dirigir las actividades de los empleados de la Sociedad e impartir las ordenes e instrucciones que exija la buena marcha de la empresa. 7. Citar a la JUNTA DIRECTIVA cuando lo considere necesario o conveniente y mantenerla adecuada y oportunamente informada sobre las marcha de los negocios sociales; someter a consideración los balances de prueba y suministrarle todos los informes que ella le solicite en relación con la Sociedad y con sus actividades. 8. Presentar a la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS anualmente en su Reunión Ordinaria, el balance de fin de ejercicio junto con los informe y proyecto de distribución y demás detalles e informaciones especiales exigidos por la Ley, previo el estudio, consideraciones y aprobación inicial de la JUNTA DIRECTIVA. El informe contendrá además una descripción de los riesgos inherentes a las actividades relacionadas con la Sociedad y demás aspectos relativos a su operación de conformidad con las normas vigentes. 9. Cumplir, hacer cumplir y difundir adecuadamente el Código de Buen Gobierno de la Sociedad y 10. Las demás que le corresponde de acuerdo con la Ley. **FACULTADES:** La Representación Legal de la Sociedad corresponde a las personas enunciadas en el Artículo 48 de estos estatutos, quien en los términos de esa disposición podrán celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social o que tengan el carácter simplemente preparatorio, accesorio o complementario para la realización de los fines que la Sociedad persigue y los que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la Sociedad. Las operaciones, actos y contratos de que trata este artículo no tendrán limitación alguna. (Escritura Pública 415 del 04 de mayo de 2017 Notaria 14 de Medellín)

Que figuran posesionados y en consecuencia, ejercen la representación legal de la entidad, las siguientes personas:

NOMBRE

Juan David Correa Solórzano
Fecha de inicio del cargo: 05/05/2016

IDENTIFICACIÓN

CC - 98542022

CARGO

Presidente



Superintendencia Financiera de Colombia

La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co con el número de PIN

Certificado Generado con el Pin No: 3288635162309594

Generado el 01 de octubre de 2024 a las 09:34:06

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Juan Pablo Espinosa Arango Fecha de inicio del cargo: 18/05/2023	CC - 93398023	Vicepresidente de Riesgos
Juan Pablo Arango Botero Fecha de inicio del cargo: 12/03/2020	CC - 98545420	Vicepresidente Jurídico y Secretario General
Felipe Andres Herrera Rojas Fecha de inicio del cargo: 12/01/2017	CC - 15515499	Representante Legal en Calidad de Vicepresidente de Inversiones
Daniel Giraldo Giraldo Fecha de inicio del cargo: 11/12/2019	CC - 1037581063	Representante Legal Judicial
Juliana Montoya Escobar Fecha de inicio del cargo: 22/06/2015	CC - 39176497	Representante Legal Judicial
David Acosta Baena Fecha de inicio del cargo: 09/03/2022	CC - 1037615180	Representante Legal Judicial
Marcela Piedrahita Cárdenas Fecha de inicio del cargo: 04/01/2023	CC - 43974184	Representante Legal Judicial
Adriana Lucia Mejía Turizo Fecha de inicio del cargo: 22/06/2015	CC - 43985699	Representante Legal Judicial
Pablo Mauricio Ferrer Henao Fecha de inicio del cargo: 26/03/2020	CC - 71722470	Vicepresidente de Tecnología y Servicios a los Clientes


NATALIA CAROLINA GUERRERO RAMÍREZ
SECRETARIA GENERAL

"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto tiene plena validez para todos los efectos legales."